

GEN CAPITAL FEDERAL

PLATAFORMA ELECTORAL

Elecciones Generales del 26 de octubre de 2025

Se propone trabajar en la construcción de un desarrollo social armónico, la honestidad, la igualdad, la diversidad de opiniones y reconoce que la democracia como el sistema para proteger a las minorías, defender los derechos civiles y sociales, mejorar la distribución del ingreso y lograr más amplia la participación política.

Confiamos en profundizar las políticas de igualdad y la independencia de los poderes públicos y en el diálogo y la persuasión como herramientas de la negociación política.

Los procesos de desarrollo económico o bienestar social deben ir acompañados de una verdadera igualdad ante la ley, instituciones cada vez más fuertes y una cultura política que premie el diálogo y favorezca la construcción de una sociedad plural y tolerante.

El bienestar debe ir junto al crecimiento económico y social sostenido.

Defendemos las políticas de defensa de los derechos humanos como un eje fundamental de la vida en común.

En la construcción de una democracia fuerte es indispensable un sistema judicial cercano a los ciudadanos, independiente, moderno y transparente, que sea eficaz en la lucha contra el delito, el cuidado de las víctimas y la resolución de conflictos.

La CABA y el país requiere crecer de modo sostenido. La Argentina necesita una macroeconomía estable, equilibrar su presupuesto público y generar condiciones regulatorias y fiscales para crear empleo formal e iniciar un proceso consistente de reducción de la pobreza.

Deben lograrse inversiones a largo plazo que permitan la actividad económica y desactiven el impuesto inflacionario, con una política monetaria prudente y un tipo de cambio acorde con sus necesidades de integración internacional. Sólo con equilibrio en el presupuesto y la lenta y difícil recuperación de la confianza en la moneda podremos bajar la presión fiscal e incrementar las posibilidades de nuestra economía.

El consenso macroeconómico es indispensable, pero debe ser apenas el primer paso de una nueva trama económica más competitiva, más intensiva en conocimiento, más integrada al mundo, más diversa y sobre todo más responsable.

El federalismo argentino ha sido en extremo deficiente, pero funcional a determinados intereses políticos. Provincias, Nación y Municipios deben encarar un diálogo sincero, porque ése es el mandato de nuestros ciudadanos. Está agotado el tiempo del “control político” de los territorios a costa del desarrollo, con el Estado más ocupado de ampliar malas prestaciones que de generar oportunidades económicas.

Se necesita una reconfiguración territorial de Argentina, tan necesaria, ya ha empezado, con el shock de inversiones en infraestructura, la creciente resolución de nuestro drama energético, las mejoras en conectividad del país.

El principal problema económico de la Argentina es la pobreza y que todas las acciones de gobierno deben estar orientadas a reducirla. El mejor camino para lograrlo es a través de un enfoque integral que reconozca la complejidad y la gravedad del desafío. Esta situación dramática tiene muchas dimensiones y, por eso, una política de desarrollo humano tiene que ofrecer no sólo un piso mínimo de ingresos para las familias que lo necesitan y mejorar la calidad de vida en las ciudades y los barrios del país y ofrecer caminos de movilidad social, para romper el círculo vicioso de la pobreza.

El Estado debe tener un rol dinámico que articule la generación de la economía social y los procesos de integración efectivos. Hay que

Crear empleo formal, la extensión de las redes de agua corriente, cloacas, asfalto e Internet; sistemas de salud y educación universales y de calidad; y programas sociales enfocados en el desarrollo de habilidades para ingresar el mercado de empleo.

Es necesario generar mejores condiciones de empleabilidad, acceso al crédito, seguridad en los barrios y organización familiar para elevar el horizonte de ciudadanía en los ambientes de alta vulnerabilidad. Las políticas de contención, por sí mismas, muestran un límite estrecho e insatisfactorio.

La educación es la mejor herramienta para darles a todos los argentinos la oportunidad de ser quienes ellos y ellas quieren ser. Una educación universal y de calidad es también la mejor manera de preparar a la Argentina para los desafíos del futuro y fomentar una cultura de innovación, investigación y desarrollo que nos permita estar en la frontera del conocimiento global.

Debemos acompañar e impulsar el movimiento social por alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La emergencia de una sociedad con paridad de género es tal vez la novedad política más importante de este tiempo: nos interpela, nos cuestiona y nos obliga a repensar políticas, instituciones y actitudes. No se trata de un tema de mujeres, más allá del protagonismo femenino: es un tema de justicia y el Estado debe ser garante de este proceso.

Las sociedades que garantizan derechos a sus ciudadanos lo han hecho gracias un conjunto de bienes públicos que los respaldan, los integran y se constituyen en un marco

de seguridades. Necesitamos seguir construyendo un Estado democrático de calidad, que al tiempo que nos representa y nos provee esas condiciones de manera adecuada y equitativa.

Queremos un Estado moderno e inteligente que se enmarque en los principios de la justicia, la igualdad y la honestidad en la gestión del Estado.

La Ciudad de Buenos Aires debe construir su identidad a través del diálogo y debe encontrar acuerdos básicos, para luego convertirlos en políticas de Estado. Eso posibilitará reglas de juego estables, la reducción de la conflictividad social y la reiteración traumática de cambios bruscos y cíclicos de las políticas, que destruyen la credibilidad y la confianza.

Los problemas estructurales de la Ciudad de Buenos Aires no pueden resolverse en el plazo de una gestión gubernamental. Todos exigen estrategias de mediano y largo plazo.

La ampliación de la concertación requiere la inteligencia necesaria para encontrar coincidencias básicas y promover consensos que beneficien el interés general. No puede ser sólo el recurso desesperado de gobiernos en situaciones de crisis que intentan transferir a todo el sistema político el fracaso de su gestión.

Es imprescindible generar un tramado institucional que haga del diálogo una práctica permanente de la vida republicana. Es necesario encauzar la participación activa y responsable de las fuerzas políticas, las entidades representativas de la producción y el trabajo, las provincias, las instituciones académicas y todas las organizaciones de la sociedad civil.

El modelo de desarrollo con capacidad de atender las problemáticas de los sectores más desprotegidos de la sociedad y asegurar mejores condiciones de vida para las generaciones futuras, necesita sostenerse en instituciones sólidas que garanticen previsibilidad y generen confianza en la ciudadanía.

Es necesario que los partidos políticos vuelvan a erigirse como columnas del sistema democrático, de modo de dar sentido a su representación, abriendo nuevos ámbitos para la participación social. Los mismos son actores fundamentales para la construcción de consensos y políticas de Estado

Es importante reconocer el rol de las mujeres y los jóvenes, que son parte de las nuevas transformaciones sociales y culturales que la política debe saber interpretar. Esto facilitará su inclusión en los ámbitos decisorios de la vida pública y el establecimiento de una perspectiva de género como parte sustancial de todas las políticas de Estado.

El sistema institucional debe otorgar una garantía eficaz para la vigencia de los derechos de las personas, la implementación de mecanismos efectivos de participación ciudadana y social, así como el pluralismo y la alternancia.

El Estado de Derecho implica un funcionamiento armónico y equilibrado de los tres poderes del Estado, asegurando su funcionamiento preciso, responsable e independiente, dentro de las competencias que les asigna la Constitución Nacional. La creación de las condiciones de competitividad e inserción internacional que requiere la Argentina demandan, como requisito ineludible, ciertos aspectos institucionales fundamentales, como la existencia de un Poder Judicial independiente y creíble, un sistema de representación popular basado en la equidad y la transparencia en las competencias electorales.